



GD-F-008 V.10

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20184010008895 DEL 09/02/2018

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el municipio de CONTRATACIÓN en el departamento de SANTANDER, es de categoría 6 y como fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2016, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de CONTRATACIÓN, departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, que dispone:



- *“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya”.*

Que la Resolución No. SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, fue notificada personalmente por medio electrónico el 29 de noviembre de 2017.

Que el municipio de Contratación, mediante radicado número No. 20175291067912 del 12 de diciembre de 2017, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN.

2.1 Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Menciona el representante del ente territorial que al ser analizada la calificación emitida por esta superintendencia en el cual se descertificó al municipio de CONTRATACIÓN mediante resolución SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, queda desvirtuada la presunción de legalidad que pudiera tener dicha resolución, ya que es contraria a la realidad fáctica y documental presentada, pues en el Acuerdo 004 del 20 de febrero de 2012 sí se determinaron los porcentajes de contribuciones para uso comercial e industrial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo segundo del acuerdo en comento, en el cual se estableció lo siguiente: “(...)

“ARTICULO SEGUNDO: La Unidad Administradora de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Contratación, o la entidad que haga sus veces aplicará a partir del año 2.012 y por el termino de cinco años, los siguientes sobreprecios a las tarifas de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la Ley 812 de 2003.”

| ESTRATO | ACUEDUCTO | | ALCANTARILLADO | | ASEO |
|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO | |
| ESTRATO 6 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| ESTRATO 5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| COMERCIAL | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| INDUSTRIAL | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| PEQUEÑO PRODUCTOR | | | | | 50% |
| GRAN PRODUCTOR | | | | | 30% |

(...)” y por ello manifiesta el representante del ente territorial que resulta infundada la calificación de no cumplimiento del requisito *“Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya”.*

Adicionalmente el recurrente manifiesta que el municipio de Contratación en el departamento de Santander si determinó los porcentajes correspondientes de contribuciones para los usos comercial e industrial en el acuerdo en mención.

2.1.3 Además de lo anterior, se indica que, en el año 2013, 2014 y 2015, el municipio de Contratación - Santander viene siendo certificado con base en el Acuerdo 004 de 2012, lo que resulta contradictorio y violatorio del debido proceso y al principio de confianza legítima.

2.1.4 Por lo anterior, el recurrente solicita sea revocada la decisión de descertificación contenida en la resolución SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, y en su lugar, se proceda a certificar al municipio de Contratación en el departamento de Santander en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, respecto de la vigencia 2016.

2.2. DE LAS PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN.

Con el radicado No. SSPD 20175291067912 del 12 de diciembre de 2017, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que sean tenidos en cuenta como pruebas:

2.2.1. Acta de posesión del señor Oriol Plata Hernández en su calidad de alcalde del municipio de Contratación en el departamento de Santander.

2.2.2 Resolución SSPD 20164010049605 del 28 de septiembre de 2016, correspondiente a la vigencia 2015.

2.2.3 Resolución SSPD 20154010040515 del 2015, correspondiente a la vigencia 2014.

2.2.4 Resolución SSPD 20144010048135 del 7 de noviembre de 2014, correspondiente a la vigencia 2013.

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a realizar el siguiente análisis:

3.1 Del estudio del requisito relacionado con “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya”.

Previo a analizar los argumentos expuestos por el recurrente, se debe recordar que el municipio de CONTRATACIÓN no cumplió el requisito en mención toda vez que si bien reportó en el SUI el Acuerdo Municipal No. 004 de 2012, por el cual se establecieron los porcentajes de subsidios para la vigencia a certificar, lo cierto es que ese acto administrativo no definió los porcentajes de contribuciones para los usos comercial e industrial para el servicio de Aseo, pues definió para pequeño productor un porcentaje del 50% y para gran productor del 30%, incumpliendo así los porcentajes establecidos en la Ley 1450 de 2011, tal y cómo se observa a continuación:

| ESTRATO | ACUEDUCTO | | ALCANTARILLADO | | ASEO |
|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO | CARGO FIJO | CONSUMO BÁSICO | |
| ESTRATO 6 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| ESTRATO 5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| COMERCIAL | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| INDUSTRIAL | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| PEQUEÑO PRODUCTOR | | | | | 50% |
| GRAN PRODUCTOR | | | | | 30% |

Frente a este incumplimiento, el ente territorial argumenta que al ser analizada la calificación emitida por esta superintendencia en el cual se descertificó al municipio de CONTRATACIÓN mediante resolución SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, queda desvirtuada la presunción de legalidad que pudiera tener dicha resolución, ya que es contraria a la realidad fáctica y documental presentada, pues en el Acuerdo 004 del 20 de febrero de 2012 sí se determinaron los porcentajes de contribuciones para uso comercial e industrial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo segundo del acuerdo en comento.

Respecto al presente argumento debe manifestar el despacho que la decisión adoptada en la Resolución SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, se surtió atendiendo los principios normativos establecidos y en garantía al debido proceso, por tanto, la actuación adelantada por esta entidad se encuentra ajustada a Derecho, lo cual se evidencia en la resolución objeto de recurso y en la actuación adelantada al ente territorial que obra en el expediente No. 2017401351600916E, por lo tanto no es cierto que la resolución en mención carezca de presunción de legalidad.

Ahora bien, valga señalar, que el reproche efectuado al municipio no se hizo con ocasión de un capricho por parte de esta entidad, sino al observarse un incumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 1450 de 2011, la cual determinó que para la vigencia 2014 en adelante, el requisito no podía ser cumplido de manera opcional, sino **obligatorio**, para de esta manera acceder a la certificación del ente territorial.

Ahora bien, la Ley 1450 del 2011 determinó unos máximos de subsidios y mínimos que debe observar el Concejo Municipal a la hora de expedir el acto administrativo que establezca los porcentajes de subsidio y contribución, tal y como se observa a continuación:

Ley 1450 de 2011: "ARTÍCULO 125. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.

*Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de estrato 6: sesenta por ciento (60%); **Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%). (...)***

De lo anterior se colige que la clasificación de pequeños y grandes productores, no se encuentra establecida por la enunciada ley, como un estrato que deba ser objeto de subsidio o contribución, por ende, es claro que la contribución o aporte solidario que se aplica a las tarifas debe corresponder al uso que la ley regula y al cual pertenece el suscriptor no residencial, es decir, al uso comercial o industrial, esto, bajo el entendido que en el grupo de pequeños y grandes productores pueden existir usuarios comerciales e industriales.

Así las cosas, si bien el ente territorial afirma que el Acuerdo 004 del 20 de febrero de 2012 cumple con lo establecido en la normatividad, lo cierto es, que como se indicó con antelación, de la verificación efectuada por este despacho se pudo establecer que el acuerdo reportado para la vigencia objeto de estudio, fijó un porcentaje de aporte solidario de 30% para gran productor en el servicio de aseo, lo cual claramente incumple con el porcentaje mínimo establecido por la norma para el uso comercial que puede conformar dicha clase, el cual exige un mínimo del 50% y en consecuencia se incumple lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450 del 2011.

De conformidad con lo anterior, esta entidad no dio una interpretación distinta al acto administrativo emanado del Concejo Municipal del municipio de CONTRATACIÓN- SANTANDER, pues ciertamente lo preceptuado en su contenido no admite un significado diferente, por tal motivo el argumento del municipio no está llamado a prosperar.

Por otro lado, menciona el recurrente que, desde los años 2013, 2014 y 2015, el municipio de Contratación - Santander viene siendo certificado con base en el Acuerdo 004 de 2012, lo que resulta contradictorio y violatorio del debido proceso y al principio de confianza legítima, frente a lo cual debe manifestar este despacho que el municipio tiene la obligación de llevar a cabo un examen juicioso de todos y cada uno de los requisitos a cumplir de acuerdo a la normatividad vigente que rige la materia, entre ellos revisar y analizar la calidad de la información a reportar en el SUI, como es el caso de los acuerdos municipales que son objeto de revisión por parte de esta Superintendencia, responsabilidad que debe ser asumida en cada proceso, entendido este como la oportunidad que tienen las entidades territoriales para ajustar, corregir y cambiar la información que se considere no ajustada a las disposiciones técnicas y legales sobre las cuales soportan dichos procesos.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido respecto de la confianza legítima, que el administrado no es titular de un derecho adquirido, sino simplemente de una mera expectativa, consistente en que una situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente, lo anterior con la salvedad de que existan razones que constitucionalmente legitimen la variación¹.

En esa medida, resulta claro para este despacho que, de acuerdo a las actuaciones del municipio en torno a la ley, no se presentó un cambio sorpresivo, abrupto e inesperado en la normatividad que regula los porcentajes de subsidios y contribuciones, esto en atención a que el artículo 125 de Ley 1450 de 2011, desde su expedición se ha mantenido incólume, por lo cual la administración municipal debió tomar las medidas convenientes y oportunas para que sus actos administrativos en cada vigencia evaluada concuerden con lo fijado en la Ley, así mismo, a esta entidad le asiste la obligación de realizar ese análisis cada año para concluir si el ente territorial cumple o no con lo normado, de tal suerte que si se encuentra incompatibilidad entre lo reglado y lo establecido por el municipio, no tiene otra opción más que declararlo así, tal y como sucedió en este caso.

En conclusión, el acuerdo municipal de subsidios y contribuciones objeto de estudio no puede ser tenido en cuenta para acreditar el requisito en discusión, toda vez que no definió los porcentajes de contribuciones para los usos comercial e industrial para el servicio de Aseo, pues definió para pequeño productor un porcentaje del 50% y para gran productor del 30%, incumpliendo así los porcentajes establecidos en la Ley 1450 de 2011, por consiguiente no se accederá a la solicitud del municipio de revocar la decisión contenida en la resolución 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017.

Por otra parte, y sin perjuicio del análisis efectuado en la presente resolución, este Despacho se permite señalar que el 7 de diciembre de 2017 el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio expidió el Decreto 2079 del 2017², por medio del cual se adiciona un párrafo transitorio al artículo

¹ Corte constitucional. Sentencia t-308/11 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Poto.

² Artículo 1. Adiciónese un párrafo transitorio al artículo 2.3.5.1.2.1.6. de la subsección 1 de la sección 2 del capítulo 1 del título 5 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en los siguientes términos:

"Párrafo Transitorio. Los municipios o distritos que como resultado del proceso de certificación de la vigencia 2016, (a) se encuentren descertificados con decisión ejecutoriada, o, (b) aquellos que se encuentren en proceso de descertificación; podrán obtener la certificación para dicha vigencia, demostrando antes del 30 de marzo de 2018, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cumplimiento de los requisitos que originaron su descertificación.

2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, permitiendo que antes del 30 de marzo de 2018 el municipio subsane las falencias que llevaron a la calificación del requisito como no acreditado. Así, de considerarlo el ente territorial podrá presentar a esta entidad una solicitud en dicho sentido, acompañada de la documentación pertinente que acredite el cumplimiento del requisito que conllevó a su descertificación.

4. DEL RECURSO SUBSIDIARIO DE APELACIÓN.

El señor alcalde del municipio de CONTRATACIÓN en el departamento de SANTANDER, indica en su escrito, que interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación frente al acto administrativo No. SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, el cual fue expedido por la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, respecto a lo cual, es preciso aclararle al recurrente que contra dicha Resolución, no procede el recurso de apelación por las razones que se exponen a continuación:

El numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

- 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.*
- 2. El de apelación, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.*

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. (...)" (negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo señalado por la norma, se concluye que contra las decisiones emitidas por el Superintendente de Servicios Públicos no procede recurso de apelación **al no tener superior funcional ni jerárquico dentro de sus estructuras organizacionales.**

Por otro lado, la Constitución Política se ha ocupado del tema de la delegación, especialmente en los artículos 209 a 211, determinando las condiciones generales en que dicha figura puede ejercitarse por parte de las autoridades administrativas; particularmente, el artículo 211 de la Carta Política dispone lo siguiente:

*"La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. **Igualmente, fijará las condiciones** para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades..."*

Del precepto constitucional señalado, se colige que en relación con el Presidente de la República, la delegación únicamente procederá frente a aquellas funciones que la ley

Para tales efectos, los municipios y distritos deberán:

- i) Subsanan el requisito incumplido en relación con la vigencia objeto de la verificación que originó la descertificación; y/o*
- ii) Demostrando en una vigencia posterior a la evaluada el cumplimiento del requisito que originó la descertificación. (...)"*

expresamente le permita delegar, es decir, que no podrá desprenderse de aquellas en donde no exista dicha autorización; a contrario sensu, las demás autoridades administrativas, entre las cuales se cuentan las Superintendencias, podrán ejercer dicha facultad, en relación con todas sus competencias, excepto aquellas que en virtud de prohibición legal no se puedan delegar.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que las decisiones administrativas adoptadas en ejercicio de facultades delegadas, surgen como consecuencia de la delegación de funciones, que implica que la función administrativa delegada se supone jurídicamente realizada por su titular originario, pues el delegatario reemplaza para todos los efectos al delegante.

Por tal motivo, cuando los Superintendentes Delegados, Directores o demás funcionarios investidos de facultades delegadas por el Superintendente de Servicios Públicos, emiten decisiones en virtud de dicha delegación, debe entenderse que subrogan al Superintendente frente a las respectivas funciones, razón por la cual, en aplicación de la regla general, esas decisiones no tienen superior jerárquico para tramitar recursos o solicitudes de revocatoria.

Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

A su vez el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015 estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007.”

De tal orden, el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es absolutamente claro que la resolución de descertificación, al haber sido expedida en desarrollo de las funciones establecidas en cabeza del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios por el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 y el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, que fueron en principio delegadas a los Superintendentes Delegados y luego en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, está cobijada por la restricción de la que trata el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior y en razón a que la Directora Técnica de Gestión para Acueducto, Alcantarillado y Aseo es delegataria de funciones, los actos administrativos que dicte son susceptibles únicamente de recurso de reposición toda vez que no se tiene superior jerárquico.

Es por esto que, en el artículo segundo de la resolución de descertificación, se indicó claramente que únicamente procedía el recurso de reposición contra la resolución de descertificación, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del municipio de CONTRATAción en el departamento de SANTANDER, en su calidad de representante legal del municipio, o a quien haga sus veces, quien será citado en la Carrera 18 No. 84 – 35 en Bogotá, haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta decisión procede el recurso de reposición ante la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De no ser

posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)."

Así las cosas, es claro que el recurso de apelación interpuesto, habrá de rechazarse por improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20174010177345 del 29 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. – RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso subsidiario de apelación, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al municipio del municipio de CONTRATACIÓN en el departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).


ARTÍCULO CUARTO. – COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO QUINTO. – La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE

Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Proyectó: Fabian Casallas Rodríguez - Abogado Contratista - Grupo de Certificaciones e Información
Revisó: Gloria Paola Hernández / Oscar Castelblanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información
Aprobó: Olga Rocío Yanquen Caro – Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información 
Expediente: 2017401351600916E